



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

S u p r e m a C o r t e:

–I–

La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social se declaró incompetente para entender en el recurso de apelación deducido por la Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán contra la decisión de la Comisión Médica Central que reconoció el carácter profesional de la enfermedad no listada Covid-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 al trabajador fallecido (fs. 141 del expediente digital principal al que me referiré, salvo aclaración).

Sostuvo, en línea con el dictamen fiscal, que ante la reforma introducida por la ley 27.348 al artículo 46 de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (LRT), a partir del 1 de marzo de 2017 cesó la competencia del fuero federal de la seguridad social que preveía esa norma. A tal efecto, entendió que las actuaciones administrativas se iniciaron con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 27.348, por lo que correspondía estar —*contrario sensu*— a la decisión de la Corte Suprema recaída en la causa CSS 83050/2017/CS1, “Pisani, Sebastián Javier c/ Provincia ART y otro s/ recurso decisión comisión médica central”, sentencia del 4 de marzo de 2021.

Además, consideró que de conformidad con la regla territorial prevista en el artículo 2 de la ley 27.348, el conocimiento de la causa corresponde a la justicia laboral de la comisión médica que intervino, en el caso, de la provincia de Tucumán. Citó, a tal efecto, el pronunciamiento de la Corte Suprema emitido el 12 de noviembre de 2020 en el marco de la causa CNT 44843/2018/CS1, “Giammarrusco, Domingo c/ Prevención ART SA s/ accidente–ley especial”.

En consecuencia, sobre la base de esos fundamentos, el tribunal se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones en razón de la materia y del territorio.

–II–

Contra esa decisión, la Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán interpuso recurso extraordinario federal (fs. 142/150) que, denegado (fs. 153/154), dio origen a esta queja (fs. 7/11 de la queja digital).

Considera que la sentencia es equiparable a un pronunciamiento definitivo pues rechaza la competencia federal, causándole un gravamen irreparable ya que afecta la garantía del juez natural y la cuestión no puede ser planteada en forma idónea con posterioridad.

Sostiene que el caso suscita cuestión federal. Indica que la aplicación al caso de ley 27.348 vulnera la prerrogativa constitucional reconocida a las provincias en el artículo 121 de la Constitución Nacional. En particular, aduce que la cámara realiza una errónea interpretación y aplicación de la ley vigente. Plantea que las modificaciones a la ley 24.557 que introdujo la Nación con el dictado de la ley 27.348, no resultan aplicables a estas actuaciones puesto que la provincia de Tucumán no delegó esa competencia de carácter procesal en la Nación y tampoco adhirió a la referida reforma. En consecuencia, concluye que el trámite de la causa debe continuar ante el fuero de la seguridad social.

Asimismo, argumenta que, aun soslayando la falta de adhesión de la provincia de Tucumán a la ley 27.348, tampoco resultaría competente la justicia provincial sino el fuero laboral de la capital federal. Ello así por cuanto, si bien reconoce que el hecho ocurrió en la provincia de Tucumán, el órgano habilitado para resolver la cuestión relativa al reconocimiento del carácter profesional del Covid-19 —en tanto enfermedad no listada— es, según el artículo 46, apartado 2, inciso *b* de la ley 24.557, la Comisión Médica Central (CMC) con asiento en la ciudad de Buenos Aires.



***Ministerio Público  
Procuración General de la Nación***

Finalmente, plantea que la jurisprudencia que cita el dictamen fiscal y en el que la cámara sustenta su decisión no es aplicable al caso pues las circunstancias no son asimilables.

–III–

La cuestión planteada encuentra adecuada respuesta en el dictamen de esta Procuración General emitido en el día de la fecha, en los autos CSS 52876/2022/1/RH1, “Recurso de queja n° 1 – Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Tucumán c/ Ávila Barderas, María Emilia Constanza s/ ley 24.557”, a cuyos términos y conclusiones corresponde remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.

–IV–

Por ello, opino que corresponde desestimar la presente queja.  
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2023.